

Guadalajara, Jalisco, a 12 doce de Septiembre del año 2014 dos mil catorce.

VISTOS los presentes autos del Toca Penal número **636/2014**, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado ***** y el defensor particular en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 once de Abril del año 2014 dos mil catorce, pronunciada por el C. Juez Mixto de Primera Instancia con sede en *****, dentro de la causa penal expediente número **100/2012**, instruido en contra de *****, por el delito de **Despojo**, cometido en agravio de ***** y *****, y;

RESULTANDO :

1º. Con fecha 11 once de abril del año 2014 dos mil catorce, el C. Juez Mixto de Primera Instancia con sede en *****, dictó una sentencia definitiva mediante la cual en la parte propositiva expuso lo siguiente:

“...PRIMERA.- *****, de generales y datos estadísticos proporcionados en autos, es penalmente responsables en la comisión del delito de **DESPOJO**, previsto por el artículo 262 fracción I del Código Penal para el Estado de Jalisco, cometido en agravio de ***** y ***** de apellidos *****.
SEGUNDA.- Por dicha responsabilidad penal, se le condena a ***** a una pena privativa de libertad de **02 DOS MESES** debido a su imputabilidad disminuida, así como al pago de la cantidad equivalente a dos días de salario; en cuanto a la pena corporal, la deberán de cumplir en el Reclusorio Femenil de Guadalajara ó lugar que para ello designe el Ejecutivo de la entidad. Dicha sanción se entiende **CON DERECHO AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA** a que se refiere el artículo 71 del Código Penal una vez que satisfaga sus requisiciones, de la misma manera tendrá derecho a la **CONMUTACIÓN** de la pena, por el pago de una **MULTA** equivalente a días multa del año de sanción impuesta, debiendo en todo caso también cubrir la reparación del daño.- **TERCERA.-** Por los motivos expuestos en el considerando V de la presente resolución es procedente **CONDENAR** a la ahora acusada al pago de la **REPARACIÓN DEL DAÑO** de la forma expuesta en dicho capítulo, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 20 Constitucional, 25 y del 94 al 101 de la Ley

*Sustantiva Penal.- **CUARTA.-** Hágaseles saber a las partes el derecho y término que la ley les concede de cinco días a partir de la notificación correspondiente, para que interpongan el Recurso de Apelación en caso de estar inconformes con la presente resolución.- **QUINTA.-** Remítase copia debidamente certificada de la presente resolución al C. ALCALDE MUNICIPAL DE *****, *****, para su conocimiento y efectos legales correspondientes, recordándole que dicha sentenciada se encuentra actualmente gozando del beneficio de la libertad bajo caución.- **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...**”(sic).*

2º. Inconformes con el sentido de la resolución transcrita, la sentenciada de referencia y el defensor particular, interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue admitido en ambos efectos, se elevaron los autos para la substanciación de la alzada, correspondiendo conocer a esta Sala en razón del turno bajo el número de toca que se indica en el encabezado, avocándose por acuerdo del día trece de mayo de dos mil catorce, formulando agravios por parte de la incoada, se celebró la audiencia de vista el día trece de agosto del año dos mil catorce, ordenándose la reserva de los autos para pronunciar sentencia; y

C O N S I D E R A N D O :

I. Esta Sala es competente para conocer del presente recurso de apelación de acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y conforme con lo previsto por el artículo 1 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, por razón del territorio, materia y fuero. Dicho recurso tiene por objeto y alcance el que le concede el numeral 316 del Enjuiciamiento Penal en la Entidad.

II. La sentenciada ***** manifestó los agravios que considera le causa la resolución recurrida mediante escrito que corre agregado del toca en que se actúa.

Resulta innecesario la transcripción del texto de los conceptos de agravio que expresa la defensa, por no existir disposición expresa para tal efecto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, o en algún otro cuerpo legal, por lo que resulta ocioso llevar a cabo tal actividad, pues éstos ya obran en actuaciones, por lo que a nada práctico llevaría, se aplica por analogía, a este caso

concreto, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia firme, localizable, bajo la voz: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS”** en la página 599 del tomo VII correspondiente al mes de abril del año de 1998, de la Novena época del Semanario Judicial de la Federación, la cual a la letra dice:

“El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la legalidad de la misma”.

Consecuentemente, si en la sentencia que se pronuncie en un juicio de amparo, no existe la obligación de transcribir los conceptos de violación, por no requerirlo la ley de la materia, al no darse tal carga tampoco para los conceptos de agravio en las resoluciones que pronuncien los Tribunales de Segunda Instancia en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, debe concluirse que donde existe la misma razón debe darse la misma solución, de ahí la aplicación analógica de la hermenéutica invocada.

La tesis de jurisprudencia invocada resulta aplicable en este circuito conforme lo señalado en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece la obligatoriedad de acatarla a los Tribunales del fuero común de los Estados, como resulta ser esta Sala.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis que aparece en la página 23, volumen 81 sexta parte, de la séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO ES OBLIGATORIO TRANSCRIBIRLOS”**, que literalmente dice:

“Aún cuando sea verdad que el Juzgador no transcriba en su integridad los conceptos de violación externados por la quejosa en su demanda de garantías, a pesar de indicarlo así en su sentencia, también lo es que

tal omisión no infringe disposición legal alguna, pues ninguna le impone la obligación de hacerlo, máxime si de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito expresa las razones conducentes para desestimar los conceptos de violación hechos valer, aún cuando no transcritos”.

Razones por las cuales se omite la transcripción de los conceptos de agravio.

III. A efecto de resolver lo que en derecho corresponde, respecto al recurso de apelación de apelación interpuesto por la sentenciada ***** *** y su defensor en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 once de abril del año 20143 dos mil catorce, los Magistrados integrantes de este Cuerpo Colegiado realizamos un análisis y evaluación de las constancias y actuaciones enviadas por el Juez Resolutor para la substanciación del recurso correspondiente, lo anterior para estar en aptitud de dar contestación a los agravios que en esta Segunda Instancia presentaron tanto la sentenciada como su defensor particular, mediante el escrito de cuenta, obteniendo los siguientes resultados:

A). La sentencia impugnada, encuentra a ***** ***** penalmente responsable en la comisión del delito de Despojo previsto por el artículo 262 fracción I del Código Penal para el Estado de Jalisco, cometido en agravio de ***** y *****.

Por dicha responsabilidad penal, el Juez de Origen impuso a la encausada las sanciones que ya se identificaron al inicio de este fallo.

B). Inconforme con la opinión del A Quo, la sentenciada y su defensor particular interpusieron el recurso de apelación respectivo, el que una vez admitido originó la apertura del presente toca, en el que la sentenciada y su defensa compareció a expresar agravios, los cuales consisten de alguna manera, en alegar que una indebida valoración probatoria llevó al juez a concluir erróneamente como lo hizo, cuando a su juicio en autos alcanzó a demostrar que ella siempre ha sido poseedora del bien inmueble materia de controversia y que las pasivas jamás han ostentado aquella posesión.

C).- En apego a lo dispuesto en los arábigos 317 y 318 del Enjuiciamiento Penal para el Estado de Jalisco **y desde luego considerando que los alegatos que la sentenciada y su defensor presentaron en esta instancia atacan concretamente la integración del ilícito y la responsabilidad penal de la acusada** esta Sala estima procede a ocuparse de su estudio en conjunto con el resto de la resolución combatida, asumiendo la obligación que imponen los artículos 317 y 318 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, de estudiarla en suplencia de la deficiencia de los agravios. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 521, tomo CXXIV, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: **AGRAVIOS, ESTUDIO DE LOS.**

Ninguna violación puede cometerse por la circunstancia de que no se realice el estudio separado de cada uno de los agravios formulados, si de cualquiera manera ninguno escapa del análisis global que de todos ellos se llevó a efecto”.

Además tomando en consideración las disposiciones contenidas en los arábigos 317 y 318 del Enjuiciamiento Penal para el Estado de Jalisco, que disponen que tratándose de la apelación interpuesta por el sentenciado o por su defensor esta Sala adquiere la obligación de suplir la ausencia o deficiencia en de los agravios para invocar, de existirlos, agravios que favorezcan la condición legal de la activa, en consecuencia se estima procedente emitir los siguientes razonamientos:

Conforme al artículo 14 Constitucional (fundamento de la resolución cuyo análisis nos ocupa) para la privación de la libertad dictada por el Juez de primer grado, a petición del órgano acusador, es menester acreditar tanto el tipo penal de que se trata, como la responsabilidad que se le atribuye a la acusada *****, para lo cual se deberán analizar cabalmente aquellos aspectos en ese mismo tenor:

DEL DELITO. El órgano acusador, en función a las facultades que le otorga el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, endereza acusación en contra de *****, por su responsabilidad criminal en la comisión del delito de

DESPOJO previsto en el artículo 262 fracción I del Código Penal para el Estado de Jalisco, cometido en perjuicio de * * *

* * * * * y * * * * *

* * * * *. Por ello un primer aspecto deberá abordar lo relativo al análisis del acto materia de acusación y su debida tipificación conforme al precepto legal que lo contiene, así debe decirse que el texto legislativo antes invocado prevé:

Artículo 262. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa por el importe de dos a doce días de salario:

I. Al que, de propia autoridad y haciendo violencia física o moral, o furtivamente, o empleando amenazas o engaño, ocupe o use un inmueble o un derecho real que no le pertenezca.

...

II. ...

III. ...

IV. ...

Las sanciones anteriores serán aplicables aun cuando la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa.

En ese sentido, atendiendo al numeral 14 Constitucional que indica que no podrá aplicarse al acusado pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito en cuestión, en consonancia con el diverso arábigo 5º del Código Penal para el Estado de Jalisco, según el cual delito es el acto u omisión que concuerda exactamente con la conducta, que como ilícita, se menciona expresamente, en este caso, en el artículo 262 fracción I ídem; por ello, debe decirse que para la actualización de la figura delictiva que nos ocupa, es menester demostrar plenamente la concretización de los siguientes elementos:

- a) *Una acción desplegada por el sujeto activo a través de la cual ocupe o use un inmueble o un derecho real que no le pertenece aún cuando su posesión sea dudosa o esté en disputa.*
- b) *Que tal acto lo lleve a cabo de propia autoridad.*
- c) *Empleando para conseguirlo la violencia física o moral, lo haga furtivamente, o mediante amenazas o el engaño.*

cuidándolo ahí en su casa. Razón por la que mi primo ***
**** al ver el desinterés y poca preocupación de sus
hermanos y al sentirse en confianza con nosotras decidí
darnos su casa junto con el patio como gratitud a los
cuidados y atenciones que las presentes le brindamos, yo
pagaba su sostenimiento y el de la casa, medicina,
comida, luz, agua, gastos de hospital etc... hasta los
gastos fúnebres ya que mi primo falleció el día 02 dos de
Noviembre del año 2011 dos mil once, como lo acredito
con el acta de defunción, por lo que luego entonces mi
hermana y yo tomamos posesión de la casa y por lo
regular salimos a *****
*****; todos los fines
de semana por razón de la posesión y la propiedad cambie
a mi nombre el recibo de la luz y demás movimientos como
la cuenta catastral, siendo el caso que mi hermana ****
** y yo salimos de la casa hacia la ciudad de *****,
el día 17 diecisiete del mes de Agosto del año en curso,
aproximadamente a las 18:00 dieciocho horas del día,
dejando la casa debidamente cerrada y permaneciendo en
casa de mi madre que vive en tal ciudad, tres días, en
virtud de su avanzada edad, regresando entonces a
nuestro domicilio el día lunes 20 veinte del mes de Agosto
aproximadamente a las 19:00 diecinueve horas, al llegar
yo trato de abrir la puerta de mi casa y veo que la llave no
entra, y me doy cuenta que la chapa esta cambiada y le
comento a mi hermana, que las chapas están cambiadas
que no podemos entrar, mi hermana no hizo nada, pero yo
sí como la casa tiene un portón por la calle *****
pues la finca da vuelta, me fui a ver el portón y me di
cuenta que no tenía el candado que siempre tiene para
cerrarlo, empuje la puerta y no se pudo abrir, entonces
revisé las ventanas, y por la ventana me di cuenta que
estaba alguien adentro, vi a mi prima ***** pero no
sé si estaba alguien más, le dije a mi hermana que alguien
estaba adentro, entonces nos regresamos a *****
***** en ***** pues no teníamos quedarnos a
dormir y como ya era tarde no acudí en ese momento a
denunciar por lo mismo que era tarde y ya no estaba
abierta esta oficina, además de que documentos de la
casa estaban dentro de la finca a la que no pude ingresar,
por lo que al día siguiente acudí con el notario *****
***** en la ciudad de *****
***** para solicitarle los documentos de la finca
y así poder proceder a denunciar quien me pidió el
certificado catastral, tardando en estos trámites 3 tres días
por tal razón presento mi querrela hasta el día de hoy.
Cabe señalar que la casa tenía muebles y documentos
guardados ahí y ***** se ha encargado de estar
quemando objetos, accesorios de la casa. Presento copias

*salga de la casa entonces nos regresamos a *****
***** en ***** pues no teníamos donde
 quedarnos a dormir. Además mi prima *****
***** tiene su domicilio en otra calle ahí mismo en
***** no me sé el nombre de la calle,
 nunca a vivido en este domicilio de *****
*, pues no es su casa. Por lo que me apego a la denuncia
 que hace mi hermana y me querello de igual manera en
 contra de ***** por el delito
 de DESPOJO o el que resulte...”.*

Denuncias que conforme al numeral 266 del Enjuiciamiento Penal Estatal adquieren valor probatorio de indicio en torno a que ***** y *****, desde el año 2008 dos mil ocho cuidaban de una persona de nombre ***** en la finca marcada con el número ***** ***** en la localidad de ***** ** en el municipio de *****, finca en la que al fallecimiento de ***** acaecido el día 02 dos de noviembre del año 2011 dos mil once, ambas pasivas quedaron en su posesión, continua y pacífica hasta el día 17 diecisiete de Agosto del año 2012 dos mil doce, salieron de dicha finca, hacia ***** *****, del municipio de ***** *** Jalisco; dejando la casa debidamente cerrada, pero a su regreso, el día lunes 20 veinte de Agosto del mismo año, al tratar de abrir la puerta, no pudieron hacerlo ya que la chapa estaba cambiada alguien tenía ocupado aquel inmueble. Manifestaciones que se consideran indicio de la comisión del delito que nos ocupa, y que de ninguna manera pueden negárseles valor probatorio, pues ese tratamiento no es dable atento al numeral 266 antes invocado que prevé expresamente que al dicho del ofendido se le concederá valor probatorio de indicio, además de que a través de la tesis jurisprudencial J/8 (de observancia obligatoria conforme al numeral 217 de la Ley de amparo) sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 51 del número 70 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación publicado en la novena época en octubre de 1993, que a la voz dice: **OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL.** Se impone la obligación a la autoridad judicial de otorgar ese valor de indicio al dicho del agraviado; véase:

Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el

examen de la víctima, de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en la ausencia de testigos, se dificultaría sobre manera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concedía crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario por si sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante.

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que este tribunal tiene la obligación de otorgar al dicho del ofendida el valor de indicio a que alude la legislación adjetiva en la materia y que lo que quedará al análisis de su corroboración en base al resto de los medios de prueba, será si dicha denuncia se considerará como un indicio preponderante o en su caso aislado. Por lo que sobra decir que el argumento de la defensa, además de lo anterior, también es infundado cuando señala que la ofendida es omisa en justificar la posesión que detenta respecto de la finca que es materia de controversia detentaba, pues contrario a ello, se encuentra aseverando, se insiste que a nivel de indicio, que desde el año dos mil ocho habitaban esa finca.

Siguiendo con el estudio de la causa que nos ocupa, debe decirse que lo denunciado por la pasiva no se encuentra aislado en autos, sino que alcanza valor probatorio preponderante al corroborarse con los medios de prueba que se citarán a continuación.

Se cuenta con la copia certificada del aviso de recibo expedido por la Comisión Federal de electricidad, respecto del servicio ***** brindado en la finca marcada con el número ***** en la localidad de *****, Jalisco y que corresponde al suministro de luz por el periodo del once de julio de dos mil doce al nueve de agosto del mismo año, extendido dicho aviso a favor de *****. Documento que en oposición a lo argumentado por el Juez, se le considera sólo como documento privado con valor de indicio al tenor del numeral 274 del Código Procesal Penal para el Estado de Jalisco, con tendencia a demostrar que la Comisión Federal de Electricidad suministra sus servicios a la finca controvertida y en sus archivos tiene registrada como titular del servicio a *****;

prueba que además corrobora indiciariamente lo denunciado por las pasivas, es decir, que ellas habitan en aquel domicilio, pues nótese como aquella empresa las reconoce como titulares del servicio eléctrico que se suministra en la vivienda. Al respecto carece de relevancia lo que de alguna manera alega en vía de agravio la en esta instancia, pues el que dicho aviso de recibo se expida nueve meses posteriores a la fecha del fallecimiento de una persona de nombre ***** ***** (antiguo poseedor de la finca según las pasivas) nada influye respecto de demostrar que en esas fechas (julio-agosto de dos mil doce) aquella empresa reconoce a ***** como titular del servicio de electricidad.

Con la copia certificada del testamento público abierto que consta en el instrumento ***** ***** de la Notaria Pública ***** del municipio de ***** en la que su titular ***** ***** fe dató el que ***** ***** otorgó aquel testamento heredando a ***** ***** y ***** de apellidos ***** todos sus bienes, derechos, acciones presentes y futuras. Documento público que conforme al numeral 271 y al 272 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, adquiere pleno valor probatorio para demostrar que ***** ***** externó como su voluntad, heredar todos sus bienes y derechos a ***** y ***** ambas de apellidos *****, empero sin que dicha prueba se pueda considerar como apta para acreditar el dicho denunciado por las pasivas pues a pesar de que en dicho documento se refiere que el citado hereda sus bienes a las pasivas, del propio documento no señala entre dichos bienes la finca controvertida. También debe apuntarse que es trivial (para el derecho penal que aquí cobra relevancia) lo alegado por la defensa en esta instancia en cuanto a los requisitos de validez del documento público que nos ocupa (que esgrimen en torno a la capacidad del que hereda) pues ello ni es materia de la litis no pertenece al ámbito legal que nos ocupa, sino que su validez, en caso de ser controvertida, corresponde a diversa autoridad judicial en el campo del derecho privado resolverla. A más que, como se dijo, ni siquiera es apta para acreditar la materialidad del delito que nos ocupa.

Con dos constancias que expide el delegado municipal y oficial del registro civil ***** de la localidad de *****

*****, municipio de ***** en las cuales el funcionario en cita dice hacer constar que ***** declara como de su propiedad la finca marcada con el número ***** en la localidad de *****, municipio de ***** y que externa como su voluntad el que a su muerte, ***** y ***** de apellidos ***** queden en posesión de aquella finca. Documento público que al ser expedido por un funcionario en el ejercicio de sus funciones, conforme a los artículos 271 y 272 de la Ley Adjetiva en Materia Penal para el Estado de Jalisco, se considera como una prueba plena de que ante aquel delegado compareció una persona de nombre ***** y expresó que la finca controvertida era de su propiedad y que era su voluntad que a su muerte, la misma quedara en posesión de las ahora agraviadas. Sin que cobre trascendencia alguna lo alegado por la defensa en esta instancia respecto de los documentos en cuestión, pues el que este documento se haya expedido dos meses posteriores al testamento otorgado por ***** y veintiséis meses previos a su muerte de ninguna manera demuestra que los testigos y el delegado que lo suscribe hayan sido “comprados” como alega en el escrito que corre agregado en los autos del toca que se analiza.

La copia certificada del acta de defunción ***** de la oficialía del Registro Civil ***** de ***** en la que se registró la muerte de ***** acaecida el día dos de noviembre de dos mil once; documento público que conforme a los arábigos 271 y 272 del ordenamiento procesal penal para el Estado de Jalisco, tiene valor probatorio pleno para demostrar la fecha en que falleció ***** empero sin que dicho dato cobre relevancia alguna en torno a la comprobación del ilícito que nos ocupa, menos aún en lo relativo a demostrar su inexistencia (como alega la defensa) pues bajo ninguna circunstancia la naturaleza de la documental en cuestión siquiera puede servir para suponer quién tenía la posesión de determinada finca o quien vivía en ella al fallecer el referido *****.

Con las copias certificadas del recibo oficial ***** expedido por el Ayuntamiento Constitucional de ***** en el que obra el pago realizado por las pasivas por concepto de impuesto predial relativo a la finca marcada con el número *****

***** de la población ***** en el municipio de *****, así como con el certificado catastral expedido por el encargado de catastro e impuesto predial de aquel municipio de Estado. Documentos públicos que al tenor de los artículos 271 y 272 del Enjuiciamiento Penal Estatal, se consideran como pruebas plenas de que el Ayuntamiento de aquel municipio ha expedido a favor de la pasivas un recibo por concepto de pago de impuestos relacionados a la finca controvertida y que en el catastro de tal municipio aparecen como dueñas ambas ofendidas. Sin que dicha prueba opere a favor de la ahora sentenciada como alega su defensa, pues lejos de apoyarla, sirve como un indicativo más que corrobora que las pasivas sí tenían la posesión del inmueble que es ahora controvertido.

La inspección ministerial de la finca controvertida en la que el Fiscal asentó:

*“...El suscrito agente del ministerio publico LICENCIADO ***** procedí a trasladarme a la localidad de ***** municipio de ***** ***** justo a la calle ***** que tiene su cruce con la calle ***** y al llegar al inmueble marcado con el ***** se observa que de frente cuenta con aproximadamente 28 mts de ancho misma que aproximadamente 16 mts dieciséis metros pertenecen a la casa habitación que se encuentra con enjarre y pintada en color verde, con perta de ingreso metálica color negra con ventana se observa que la chapa de la puerta fue removida y que cuenta con una nueva, mientras que el corral se encuentra circulado por una barda de ladrillos y portón metálico que sirve de ingreso, mismo que se observa cuenta con una cadena metálica oxidada mientras que el candado se observa que es nuevo. Inmueble que a simple vista se observa cuenta con un techo de bóveda y piso de mosaico, luego entonces se asoman por la ventana de la cocina la señora ***** ***** y ***** *****, razón por la que nos presentamos y entrevistamos con las mismas haciéndoles de su cocimiento el motivo de nuestra presencia, pidiéndoles autorización para continuar con la presente diligencia ahora del interior del inmueble en cuestión, mismas que dijeron que lo consultarían con su abogada realizando en ese momento una llamada vía celular y minutos más tarde respondieron que no autorizaban el ingreso a dicha finca a esta Representación Social. Bien inmueble que colinda al norte con el señor ***** *****, al sur con la calle ******

*****”

Inspección ministerial que adquiere valor probatorio pleno de acuerdo a lo estipulado en el artículo 269 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, apto para demostrar la existencia del bien que es sujeto a controversia, el que por sus características se trata de aquellos considerados legalmente como inmuebles y que además, se fe dató que el mismo se encontraba ocupado por *****.

Lo declarado por la testigo *****
*****, quien ante la Fiscalía integradora manifestó:

“...Respecto de los hechos que se investigan manifiesto no tener ningún interés que no sea el esclarecimiento de los hechos; por lo que en este momento señalo; Que siempre he vivido en el poblado de ***** por lo que efectivamente conozco a la persona de nombre ***** y a ***** Y A SU HERMANA ***** como al hoy finado ***** o ***** y sé y me consta que ***** Y ***** tienen aproximadamente 10 diez años que habitan en esta casa, viviendo también en esta casa ***** o ***** como lo conozco y sé que esa casa era de los padres de ***** o ***** , así como que ***** Y ***** atendieron a ***** durante varios años y desde que ***** murió ***** Y ***** se quedaron en esta casa viviendo, me consta porque seguido voy a visitarlas y ellas salen de su casa uno o dos días cuando van a visitar a su mamá, y respecto de que ***** se metió a la casa de ***** Y ***** me di cuenta que ***** Y ***** , fueron a visitar a su mamá y tenían como tres días que se fueron y recuerdo que fue un día martes día 21 veintiuno del mes de Agosto del presente año, iba caminando por la calle cerca de la casa ***** y ***** se veía un fogatón que ardía alto, hasta chamuscaron las ramas del mezquite esto en el corral de la casa de ***** Y ***** , mencionando unos chiquillos que era ***** la que andaba limpiando ahí, pero no me acerque, después me entere por ***** que ***** y ***** ya no pudieron entrar a su casa porque ***** estaba ahí...”

Testimonio al que no puede concedérsele más valor que el otorgado en primera instancia como un indicio al tenor el numeral 265 del Código Procesal Penal para el Estado de Jalisco del que se desprende que a la declarante le consta que ***** y ***** habitaban en la finca marcada con el número ***** ***** en la localidad de ***** en el municipio de *****, ***** lo que así hicieron por un periodo aproximado de diez años; que sabe que las ofendidas acostumbraban salir de su caso por lapsos de uno o dos días y; que el día 21 veintiuno de agosto del año 2012 dos mil doce vio que se quemaba algo dentro de aquella finca y después supo que a las pasivas ya no les fue permitida la entrada a la finca. Entiéndase pues, el anterior testimonio es un indicio de que * ***** y ***** vivían antes del día de los hechos en aquella finca controvertida y luego les fue impedido el uso de tal vivienda.

Se cuenta con lo declarado por el testigo ***** *****, quien ante el Fiscal dijo:

*“... Respecto de los hechos que se investigan manifiesto no tener ningún interés que no sea el esclarecimiento de los hechos; por lo que en este momento señalo; Que tengo 31 treinta y un años viviendo en el poblado de ***** *****, por lo que efectivamente conozco a la persona de nombre *****, y a ***** ***** Y A SU HERMANA ***** * como al hoy finado *****, por lo tanto sé y me consta que ***** ***** le hereda la finca ubicada con la calle ***** ***** ***** a ***** y a ***** ***** ya que yo fui testigo de tal acto jurídico en el que ***** lo hace constar ante el delegado municipal de ***** *****, documento que obra en actuaciones y del cual me es mostrado reconociendo la firma que aparece con mi nombre como mía y de mi puño y letra, y por lo tanto me consta que ***** y ***** se hicieron cargo de su primo ***** hasta que él murió, y estando siempre en la finca cuidándolo y cuando ***** murió siempre han permanecido en esa finca habitándola y me consta porque seguido voy de visita, les llevo nopales, elotes o producto del campo y en todo este tiempo que yo he habitado en ***** y que he visitado tal finca nunca he encontrado a ***** *****, pues ella tiene su domicilio en el mismo poblado*

de *****, por la calle *****
*** donde vive con sus hijos y su esposo, siendo el caso
que ***** Y *****
salieron de ***** a visitar a su mamá
quien vive en *****, *****, Jalisco
y lo hicieron por dos días, sin recordar la fecha pero tiene
pocos días, no sé decirle que día de la semana es que ví a
un cerrajero de una camioneta que no es del poblado
cambiando chapas de las puertas de la casa donde viven *
***** Y *****, esto alrededor de las 5:00 cinco o
6:00 seis de la tarde, lo vi en la puerta negra sin embargo
no supe porque y tampoco le pregunte, y como yo soy
velador por la noche me fui a mi trabajo y ya no vi quien o
que paso en la finca ***** numero 30, hasta el día
siguiente es que al salir de mi domicilio ya que vivo por la
misma calle es que vi a *****
* dentro de la casa de ***** Y *****, la ví
quemando algunas cosas, entre ellas un buro y una cama
mismas que ya había visto antes, dentro de la finca *****
***** y las vi en las
ocasiones en que visite en esta casa a ***** y a ***
*****, se me hizo raro verla dentro de la casa pero no le
pregunte nada pues solo la saludo pero no platice mucho
con ella, además he visto a su esposo *****
***** y otra persona que no sé quién es, después
de eso, a otro día por la tarde vi al mismo cerrajero de la
camioneta blanca por fuera de la finca *****
***** colocando un barandal en un
hueco que tiene la casa, en una bardita donde *****
Y ***** no tenían nada para que entrara el viento,
siendo todo lo que yo mire, respecto que la señora *****
*** se metió sin autorización a esta casa desconozco yo
solo sé y me consta que en esta casa habitaban *****
* Y *****...”

Atesto que al ser valorado de manera individual no tiene sino
el valor de indicio a que se refiere el arábigo 265 del Código
Procesal Penal para el Estado de Jalisco, brindando como
datos relevantes el que el testigo señala que le consta que al
morir ***** las pasivas *****
** y ***** quedaron viviendo
en la finca marcada con el número *****
***** en la localidad de *****
*****; que en una ocasión ambas pasivas salieron de
la casa y no regresaron en dos días, lapso en el que el testigo
advirtió cuando un cerrajero alrededor de las 17:00 diecisiete
y las 18:00 dieciocho horas cambiaba las chapas de la puerta
de acceso a la finca, para al día siguiente advertir la
presencia de la ahora acusado en el interior de la finca

mientras quemaba cosas. Es decir, el testimonio en cuestión es un indicio que apunta a que ***** y ***** ***** habitaban aquella finca ***** de *****, *****.

Obra en actuaciones lo declarado por el testigo de los hechos de nombre *****, quien dijo al Fiscal:

*“...Respecto de los hechos que se investigan manifiesto no tener ningún interés que no sea el esclarecimiento de los hechos; por lo que en este momento señalo; Que siempre he vivido en el poblado de ***** por lo que efectivamente conozco a la persona de nombre *****, y a ***** Y A SU HERMANA ***** como al hoy finado *****, y sé y me consta que ***** Y ***** viven en ***** en la calle *****, sé que ***** Y ***** salen de su casa para ir a visitar a su mamá en *****, en ***** y regresan a ***** e incluso se traen a su mamá para aquí cuidarla, casa que es de ***** Y ***** y lo sé porque yo las acompañe cuando ellas firmaron un testamento con el notario en ***** y me consta pues lo vi que mi esposa ***** firmo como testigo en ese documento, de esto hace aproximadamente 4 cuatro años y desde entonces sé que ellas tiene la posesión de la finca y así como la propiedad, ***** y ***** se fueron a un mandado a *****, el día 17 diecisiete del mes de Agosto del presente año, y lo sé porque yo colindo con la casa de ***** y ***** y tengo una barda donde se ve hacia el corral de la casa de ellas y cuando ellas salen dejan cerrado y una ventana con una cortina, entonces yo me asome y vi cerrado es por eso que sé que se fueron a un mandado, regresaron hasta los dos o tres días, siendo que el día lunes 20 veinte del mes de Agosto del presente año, yo escuche ruidos, como una soldadura de motor y se me hizo raro y me asome y pues era ***** SU ESPOSO ***** y otras dos personas y el que andaba soldando a quienes no conozco, incluso el esposo de *****, ***** se volteo y se rió conmigo y yo no hice nada seguí en mis labores, ya al otro día se veía humo en el patio o corral de la casa pero no supe que estaban quemando. Después me di cuenta cuando llegaron ******

*** Y ***** y quisieron entrar a su casa ya no pudieron...”.

Testimonio singular con valor probatorio indiciario al tenor del artículo 265 de la Ley Adjetiva en Materia Penal para el Estado de Jalisco, del que se desprende que al declarante le consta que ***** y ***** vivían en la finca ***** de la localidad *****. Que el día 17 diecisiete de agosto del año 2012 dos mil doce las pasivas salieron de su domicilio y lo dejaron cerrado regresando hasta a los dos o tres días y el día 20 veinte de agosto del mismo año vio a la ahora acusada en el interior de la finca donde vivían las pasivas e incluso se pudo percatar de que ya ambas no pudieron volver a ingresar a su domicilio. En ese sentido, el testimonio que nos ocupa es un indicio de que ambas pasivas vivían y tenían en su posesión el bien inmueble que nos ocupa y que posteriormente al día 17 diecisiete de agosto del año 2012 dos mil doce ya no pudieron volver a usar el mismo porque alguien habían ingresado al mismo.

La declaración emitida por la testigo de cargo ***** *****, quien ante el representante social investigador adujo:

*“...Respecto de los hechos que se investigan manifiesto no tener ningún interés que no sea el esclarecimiento de los hechos, por lo que en este momento señalo; que al saber las circunstancias en las que se encuentra la situación de mi hermana y mis primas comparezco voluntariamente a narrar el cómo se han dado los hechos respecto de la finca número 30 treinta en la calle ***** en ***** *****. Primeramente aclaro que éramos nueve hermanos, y ahora solo quedamos tres, *****, ***** ***** y yo. Todos nos casamos y salimos de esa casa, solo ***** se quedó en esa casa, mi hermana ***** se casó y se fue a ***** *****, ella iba y venía y cuando ella regresaba llegaba a su casa en *****, no en la casa de mi hermano *****, en una ocasión mi hermano ***** me mando llamar, por tal razón yo me vine de ***** ***** y estado en mi casa, mande llamar a mis primas ***** ***** Y *****, y mi hermano *****, ***** se encontraba en ***** ***** y ya habíamos quedado que nadie quería nada de la casa, por lo que quedamos, mi hermano ***** *****, ***** y YO que mis primas ***** y ***** ***** se iban a hacer cargo de mi hermano ***** y*

que de ellas sería la casa ***** numero 30, por lo que desde entonces mis primas se hicieron cargo de mi hermano en esa casa en *****, desde el año 2005 dos mil cinco aproximadamente, y ya desde antes lo atendían pues mi madre murió, en algunas ocasiones se lo llevaban a ***** y así estaban de ** ***** a *****, por lo que me consta que mis primas han tenido la posesión desde siempre de esa casa, y respecto de la declaración que hace mi hermana puedo manifestar que no es verdad que ella y mi hermano haya tenido la posesión de esta casa, pues mi hermano tiene su domicilio particular independiente de la casa ***** a unas cuerdas de ahí, tampoco es cierto que su hija y sé que se llama ***** ***** y su esposo vivieron en esta casa, pues cuando ella se caso se fue a ***** ***, y ahora está aquí en ***** y no tiene casa aquí, siempre llega a casa de su mamá, mentira igual que ella estaba aquí en el año 2009 dos mil nueve, y por lo tanto no es verdad que en pláticas mis primas le pidieran que le vendieran un pedazo de la casa, y no es verdad pues mi hermana no le hablaba a mis primas, tampoco es verdad que su hija y ella se hicieran cargo de mi hermano, todo el tiempo lo hicieron mis primas ***** ** Y *****, respecto de que mi hermana ***** manifiesta que mis primas se dejaron venir al velorio, eso no fue así, mi hermana ***** no estaba en el país a mi hermano lo tuvieron que preparar y velarlo dos días para esperarla y poderlo sepultar, mientras mis primas ** ***** Y ***** se hicieron cargo de todo, y realizaron los gastos de todo, no es verdad como ella lo manifiesta, además en cuanto a la señora Ofelia, esta señora les hacía desayuno, comida y cena, mis primas se quedaban con él y después de lo llevaban a ***** por que iban a mandado, se quedaban unos días en *** *** y ya se regresaban a *****, no es cierto que mi hermana y mi sobrina lo atendían. Además yo estuve presente cuando mi hermano quiso ceder y donar los derecho de la casa ***** numero 30 a mis primas ***** Y ***** y lo hizo por su propia voluntad...”.

Declaración que al analizarse de manera singular, tiene valor probatorio de indicio conforme al artículo 265 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, que para lo que en el asunto concreto nos interesa revela que ambas pasivas ***** y ***** sí tenían la posesión de la finca marcada con el número ***** ***** de la

localidad ***** en el municipio de *****
*****, pues dice constarle que ambas vivían ahí.

No pasa desapercibido a los que esto resuelven, que como testimonios de cargo, durante la etapa de instrucción se desahogaron los dichos de ***** (visible a foja 142 del original) y ***** (que obra a foja 145 de los autos sometidos a revisión), empero sin que se estime procedente valorarlos como útiles para pretensión punitiva dado que al no ser motivo de queja su desestimación por parte de la representación social, esta Sala no puede utilizarlos como una prueba más en contra de la acusada pues de hacerlo así sería tanto como resolver en perjuicio del recurrente, lo que desde luego se proscribe en el numeral 328 del Código Procesal Penal para el Estado de Jalisco.

El cúmulo de prueba enunciado con antelación y valorado en lo individual conforme a los arábigos 264, 265, 266, 269, 271, 272 y 274 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, ahora adminiculados de manera lógica, jurídica y natural, permiten aseverar que, como se dijo en primera instancia, en autos sí se cuenta con elementos suficientes para integrar la figura delictiva de **DESPOJO** que se prevé en la fracción I del artículo 262 del Código Penal para el Estado de Jalisco cometido en perjuicio de ***** y *****. Ello es así en razón a que tales pruebas han deja en evidencia que previo a las 18:00 dieciocho horas del día 17 diecisiete de agosto del año 2012 dos mil doce, ***** y ***** de apellidos *****, tenían la posesión de la finca marcada con el número ***** en la localidad de ***** municipio de *****, finca de la que tenían una posesión quieta y pacífica, desde que comenzaron a vivir en aquel lugar con *****. Que mientras ***** y ***** se encontraba ausentes de aquella finca en el transcurso de aquel día 17 diecisiete al 20 veinte de agosto del año 2012 dos mil doce, alguien cambió la chapa de la puerta de acceso a la finca, por lo que a partir de aquel momento, las pasivas ya no pudieron hacer uso de aquel inmueble, en virtud de que además de impedirsele el acceso, ya había sido ocupado, de propia autoridad y sin orden judicial alguna, por alguien más.

Sin que para arribar a la anterior conclusión, sea obstáculo lo alegado en esta instancia por la sentenciada *****
*****, quien al declarar ministerialmente expuso:

*“...BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD y poder aclarar los hechos y Usted tenga mejor conocimiento de las cosas, ya que las señoras ***** y *****, se han conducido con falsedad, ya que todo lo han inventado, ya que no se les pudo haber despojado de algo que ellas nunca han poseído, porque éstas señoras jamás han vivido en *****, la realidad de las cosas es que desde que m madre falleció, el 28 de Marzo del año 1997, la cual era la dueña de esa propiedad, yo y mi hermano de nombre ***** hemos tenido la posesión hasta el día de hoy, posesión que nunca hemos dejado de tener, por lo que es completamente falso que las demandantes, vivan o hayan vivido en mi casa, es verdad que como primas que somos, desde que estábamos de muchachas, ellas en ocasiones vienen a ***** ***** como para el tiempo de las fiestas y yo como familiares que somos y por educación les dije que cuando vinieran de visita se podían quedar a dormir en la casa que era de mi madre, la cual está ubicada en calle *****, ***** a que desde que murió mi mamá, se la preste a mi hija y a su esposo y hay estaba viviendo con ellos mi *****, ya que entre las dos lo atendíamos, pues desde joven quedó completamente ciego y últimamente había quedado sordo, ellas todo el tiempo como familiares que somos nos han visitado, pero en Abril del año 2009 dos mil nueve, llegaron de visita como siempre y en platicas me dijeron que si les vendía un pedazo de la casa que era de mi madre a lo que yo al igual que mi hermano *****, les dijimos que no, que esa casa no se vendía, que por ahora vivía ahí mi ***** *****, pero que más adelante la quería dividir para darles un pedazo a cada uno de mis hijos para que hicieran una casita y tuvieran donde vivir y a partir de ese día, venían de visita los fines de semana y sacaban a mi ***** ***** a pasear, el día 19 de Agosto volvieron a venir y me dijeron que llevarían a mi ***** ***** de paseo a ***** *****, donde viven ellas, y yo no miré nada de malo en que lo sacaran al contrario, pensé en que eran unas personas muy buenas que se iban a ir al cielo, ya que no salen del templo y se la pasan a rece y rece y así estuvieron un tiempo que no cabían con mi hermano lo traían para arriba y para abajo, venían entre semana por él y selo llevaban que a pasear, hasta que de repente se empezaron a retirar poco a poco, ya casi no iban a *****”*

*****, ni a la casa, hasta el día en que falleció mi hermano, que les avisaron los vecinos y se dejaron venir por la tarde al velorio y ya estando en el velorio empezaron a mandar como si fueran las dueñas y señoras de la casa, que de hecho ellas en actitud prepotente y sin tomar opinión de ninguno de la familia, fueron al panteón de ahí de ***** y sin permiso alguno sacaron los restos de una sobrina de nombre ***** *****, dejando los restos esparcidos por el suelo sin importarles nada y en su lugar enterraron a mi ** *****, ellas no hicieron ningún gasto de su funeral como ellas declaran, ni tampoco lo atendían, si ellas no vivían ahí, solo porque le pagaban a una vecina de nombre *****, que para que lo cuidara, pero esta señora solo iba y le dejaba un plato de comida en la mesa y se iba, lo cual solo nos causaba risa ya que mi hija y yo lo seguíamos atendiendo y estábamos siempre al pendiente de él y desde que murió mi hermano no habíamos sabido nada de ellas o por lo menos a la casa ya no se han parado para nada, hasta ahora que me mandaron el citatorio que por qué me habían demandado...”.

Declaración que si bien no constituye confesión alguna ya que lejos de que la acusada reconozca los hechos delictivos que le son atribuidos, niega categóricamente haber desplegado tales actos criminales, aduciendo que en contra de lo denunciado por ***** y ***** *****, la ahora sentenciada ***** es quien siempre ha ostentado la posesión del inmueble número ***** en la localidad de ***** en el municipio de ***** ***** y que quienes viven en esa finca son su hija ***** y su marido a quienes ellas les prestó la casa para vivir en ella. Sin embargo, conforme al numeral 276 del Código Procesal Penal para el Estado de Jalisco, al apreciar el contenido de aquella declaración en significación con el resto del caudal probatorio que obra en actuaciones, es evidente que esa sola negativa es insuficiente para desvirtuar el cúmulo que han permitido arribar a la conclusión a la que se ha llegado. Esto es, mientras la inculpada niega haber cometido el delito que se le imputa e insiste en que ella ya tenía previamente la posesión del inmueble ***** ***** de la localidad de *****, en contra de dicha afirmación se cuenta con lo denunciado por las pasivas ***** y *****, con el dicho de los testigos *****

***** , ***** , *****
 ***** y *****
 *, testigos todos los cuales coinciden en señalar que ambas pasivas –y no la acusada- eran quienes tenían la posesión de la finca controvertida, lo que además se vio apoyado en un aviso de recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad en donde consta que una de las pasivas es la titular del servicio de suministro de electricidad que se provee a aquella finca, así como con las constancias del catastro del municipio de ***** en donde se hace constar que como propietarias del bien en cita se encuentra registradas ambas denunciantes. De lo anterior, es consecuencia que la sola negativa de la inculpada sobre los hechos que son materia de acusación, sea insuficiente para desvirtuar el cumulo de pruebas que sopesan su contra, ello aún y cuando para tratar de apuntalar su negativa sobre los actos atribuidos, haya presentado como testigos a los declarantes ***** y ***** , la primera de los cuales dijo al Fiscal:

*“...Respecto de los hechos que se investigan manifiesto que yo vivo en la casa ***** desde hace 10 diez años, ya que la casa es propiedad de mi mamá y cuando yo me casé no tenía donde vivir, y me prestó la casa donde todavía vivía mi tío ***** , pues mi madre me pidió que lo atendiera y de esta manera ella estaría más tranquila pues ella iba a visitarlo, mi tío ***** desde joven quedó ciego y últimamente aproximadamente desde agosto del 2010 dos mil diez empezó a quedar sordito, yo le daba de comer y lo atendía, mi tío murió el día 02 dos de noviembre del año 2011 dos mil once, respecto de lo que mis tías ***** Y ***** denuncian, puedo manifestar que ellas visitaban la casa de mi madre, cuando vivía mi abuela y después de eso siguieron yendo a visitar a mi tío hasta que mi tío murió ellas se presentaron diciendo que ellas eran las dueñas, siendo que solo llegaban de visita un día y se iban, ya que como lo he manifestado yo vivo en tal domicilio, y nunca he cambiado las chapas de las puertas pues no tengo tal necesidad, mi madre y yo somos las únicas que tenemos juego de llaves de esta finca. Mis tías ahora que ya falleció mi tío y que ellas dicen que mi tío hizo un testamento lo ignoraba pues tengo conocimiento que mi abuela le dejó la casa a mi madre, y respecto del cómo o porque mi tío hizo otro testamento lo desconozco...”*

Mientras que *****,
dijo ante el el Agente del Ministerio Público:

*“...Respecto de los hechos que se investigan manifiesto que yo vivo en la casa ***** desde hace 10 diez años, ya que la casa es propiedad de mi suegra y desde que me case con GENOVEVA vivo en tal domicilio, aun cuando todavía vivía mi *****, a quien mi esposa atendía y yo en algunas ocasiones le atendían, además puedo decir que no conozco a ***** y *****, solo en una ocasión en las fiestas, sé que ellas viven en ***** porque he escuchado a la familia de mi esposa que ellas viven ahí, por lo que puedo asegurar que nunca han habitado la casa en la que yo como ya lo mencione vivo desde hace 10 diez años. Además sé que mi suegra tiene una hermana que vive en ***** y no conozco...”*

Testimonios a los que si bien el juez de primer grado dijo les otorgaba valor probatorio de indicio al tenor del 265 del Código Procesal Penal para el Estado de Jalisco con tendencia a demostrar que tanto ***** como ***** son quienes han habitado en la finca marcada con el número ***** en ***** de *****, desde que ambos contrajeron matrimonio y por así haberles sido autorizado por la inculpada *****. Sin embargo, al analizar estos testimonios en confrontación con el resto de los que obran en autos, conforme lo indica el artículo 276 de la Ley Adjetiva en Materia Penal para el Estado de Jalisco, debe decirse que sobre estos testimonios debe prevalecer las pruebas que de manera conjunta y contundente indican que no era los declarantes quienes vivían y poseían la finca controvertida, sino que dicho derecho lo ostentaban las ahora agraviadas, quienes así lo declararon y lo que se vio aseverado con sendos testigos ya previamente analizados y con documentos allegados para tal efecto.

Ello es así a pesar de que para corroborar el argumento defensivo de la inculpada *****, también se allegaron los testimonios de ***** (visible a foja 88 de los autos originales), ***** (a foja 89 del original), ***** (visible en la

foja 171 del los autos sometidos a revisión), *****
***** (que corre agregada en la foja 172 del expediente que se analiza), *****
** (consultable a foja 173 de los autos originales) y *****
***** (que obra en la foja 87 y en la 174 del original); lo anterior acontece en razón a que la testigo **
***** al declarar, asevera que la acusada ***** siempre ha vivido en la finca controvertida y que las pasivas no viven en ese lugar, sin embargo, ni siquiera la propia ****
***** alega vivir en aquella vivienda sino que alega que es su hija quien habita la misma, además, asevera que las pasivas no viven ahí pero también asegura no conocerlas. Por su parte, la testigo *****
*****, asevera que la acusada siempre ha vivido en el domicilio materia de controversia pero nuevamente debe decirse que la misma acusada al verter sus argumentos defensivos jamás aseveró que ella vivía ahí, sino que dijo que su hija era la habitante de aquella finca. Luego, la testigo **
***** cuando declara lo hace de una forma poco clara y sin que de su dicha se concrete nada que sirva para apoyar a la inculpada *—o en su caso perjudicarla—* pues sólo se limita a decir que la familia de ****
***** (inculpada) siempre ha vivido ahí en ****
***** y que nunca supo de problemas. Por otro lado, la testigo de descargo *****
** simplemente se concreta a señalar que ***** es quien siempre ha vivido en “*esa casa*” no pudiendo siquiera señalar a qué vivienda se refiere, además de que se insiste, la propia inculpada al defenderse no dijo ser ella quien habita aquella finca sino que lo hace su hija. Por lo que toca al ateste *****, este al declarar no refiere nada en relación a los hechos que se controvierten y luego, al ser interrogado, dice que posterior a que *****
***** murió hasta las fechas en que declara (veintiocho de noviembre de dos mil trece) que vive ***** en ese lugar, es decir, que ni siquiera puede aseverar que *****
* o alguien más viviera en el domicilio controvertido, constriñéndose a aseverar tajantemente que las pasivas no vivían ahí. Finalmente el testigo *****
**** en las dos ocasiones en que declaró trató de enfatizar en que la ahora acusada es la dueña de la finca controvertida (lo que no es materia del la litis que nos distrae), para luego aseverar que ***** tiene muchos años “ahí” pero sin poder precisar en qué domicilio y por último refiere que las pasivas nunca han vivido en ese lugar para luego concluir diciendo que en realidad ni siquiera las conoce. Así, es

evidente que todos estos testigos ofertados como de descargo, carecen de valor probatorio alguno, pues conforme al numeral 264 fracción IV del Enjuiciamiento Penal Estatal al carecer de precisión y claridad *–por las razones que por cada una de ellas ya se asentaron–* debe considerarse sin fuerza convictiva y por ende, inútiles para reforzar los argumentos defensivos de la acusada.

Tampoco destruye lo hasta el momento demostrado el resto de las pruebas ofrecidas por la defensa pues la existencia de una inspección judicial desahogada a foja 149 de los autos originales no demuestra el argumento defensivo de la pasiva al no contener dato alguno que lo apoye, caso que se repite al acudir al recibo de gastos funerarios que obra a foja 132, mismo que no contiene dato alguno que apoye el argumento defensivo de la agraviada. En ese mismo sentido deben señalarse las copias simples de una cartilla militar (foja 156), contrato de compra venta (157) y dos constancias médicas (159 y 162), pues además de ser copias simples carentes de valor probatorio, son sobre actos que carecen de trascendencia en torno a los hechos que nos ocupan.

En ese sentido los hechos que se han tenido por demostrados se consideran suficientes para acreditar la materialidad del tipo penal de Despojo que se prevé en el numeral 262 fracción I del Código Penal para el Estado de Jalisco, luego que ha quedado en evidencia que:

a) Alguien, actuando por sí misma (como se acusó), con voluntad y consciencia, entre las 18:00 dieciocho horas del día 17 diecisiete de agosto del año 2012 dos mil doce y el día 20 veinte de agosto del mismo año, ocupó la finca marcada con el número ***** ***** en la localidad de *****, municipio de *****, impidiendo que ***** ***** y ***** de apellidos ***** la usaran como lo venía haciendo previo a ese día de manera quieta y pacífica; finca que es un bien inmueble conforme lo señala el numeral 799 del Código Civil Estatal.

b) Que dicha persona activa, ocupó aquel inmueble de propia autoridad, ya que considerándose con derecho a poseer el bien usurpó a su poseedor impidiéndole el acceso, transgrediendo la prohibición de auto tutela que se prevé en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que con independencia de que la activa tenía, o no, derecho a poseer aquel inmueble,

conforme al pacto federal no estaba legitimada para actuar haciéndose justicia por sí misma, sino que para ello era necesario acudir a las instancias judiciales competentes para que se le reconociera ese derecho y se le hiciera efectivo.

c) Que además, para realizar aquella ocupación de propia autoridad, actuó **furtivamente** pues ello lo realizó cuando el día 17 diecisiete de agosto de 2012 dos mil doce, las pasivas habían salido temporalmente de aquella finca, es decir, lo hizo ante la ausencia de conocimiento de la pasiva para garantizar así que ésta no pudiera defender su derecho. Además de que empleara la violencia traducida en el cambio de chapas en la puerta de acceso a la finca, entendida pues como la violencia en las cosas que se ejerce al quebrantar los mecanismos de seguridad de las puertas para sustituirlos por otros diversos, como así lo ha sostenido el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la tesis que obra en la página 191 del tomo XII de la octava época del Semanario Judicial de la Federación publicado en julio de 1993 con el rubro y texto: **DELITO DE DESPOJO. EL CAMBIO DE LOS CANDADOS QUE PROTEGEN UN INMUEBLE SIN AUTORIZACIÓN DE SU DUEÑO O POSEEDOR, IMPLICA EL MEDIO DE COMISIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS COSAS.**

La violencia en las cosas, como medio de comisión del delito de despojo, es la acción que se ejerce para vencer los elementos naturales defensivos que tiene un inmueble o para quebrantar los sistemas de protección que utiliza su dueño o poseedor; los candados tienen indudablemente la calidad de instrumentos de resistencia y protección de los bienes, por lo que cambiarlos sin autorización de quien dispuso tal medida de seguridad, configura el elemento típico en comento.

Por tanto, este Tribunal considera legal se tenga por acreditado el delito de **DESPOJO** que se prevé en la fracción I del artículo 262 del Código Penal para el Estado de Jalisco, cometido en agravio de *****y
*****.

Sin que resulten operantes, o siquiera fundados, los agravios que en esta instancia ha vertido la defensa de la acusada, pues en primer término debe apuntarse a la defensa que no es impedimento para acreditar el ilícito que nos ocupa, el que la acusada ***** tuviera o no

derecho a la posesión de aquella finca, pues se insiste, su actuar viola la prohibición constitucional a la auto tutela y además, el propio numeral 262 del Código Penal Estatal en su último párrafo señala de manera expresa que el delito se integrará aún y cuando los derechos de posesión sea dudosos o se encuentren en disputa (reiterando así esa prohibición contenida en el numeral 17 del pacto federal). Al caso es aplicable la tesis jurisprudencial citada por el Juez de primer grado, consultable en la Sexta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Segunda Parte, XIV, Página: 100, que con el rubro de “**DESPOJO (LEGISLACIÓN DE JALISCO)**”, a la letra establece lo siguiente:

“...El delito se comete aun cuando la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa, lo que encuadra al caso para su penalidad en el artículo 355 del Código Penal...”.

También es claramente inoperante e infundado el motivo de queja de la defensa, cuando esgrime que causa oprobio a su defendida el que no se haya logrado justificar por parte de las ofendidas la propiedad del bien inmueble controvertido o la legalidad del acto a través del cual se les trasmitió su dominio pues como se ha insistido a lo largo de la presente resolución, al ser el ilícito que nos ocupa tendiente a proteger la posesión de los inmuebles, basta con demostrar que la tenía (la posesión) previamente a los hechos y que esta fue usurpada por la activa, como se demostró se hizo posterior al día diecisiete de agosto de dos mil doce. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia 70/2011 que sostiene La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se consulta en la página 83 del tomo XXXIV de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta publicado en agosto de 2011, con el rubro y texto: **DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).**

Los artículos 191, fracción I y 192, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, abrogado, y el numeral 222, fracción I, del mismo ordenamiento vigente, al prever que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, tutelan la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión; y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y

del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Ahora bien, para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de un título de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, en tanto que los artículos 192, primer párrafo, y 222, último párrafo, citados, prevén que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria.

También en la tesis jurisprudencial J/98 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que se encuentra en la Octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 80, página 56 publicado en agosto de 1994, que a la letra versa: **DESPOJO, NATURALEZA DEL.**

El despojo, más que una figura delictiva que proteja la propiedad, tutela la posesión de un inmueble.

Y en la tesis jurisprudencial J/30 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito que se encuentra en la página 53 de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su número 56 publicado en agosto de 1992, que a la letra dice: **DESPOJO, DELITO DE BIEN JURIDICO TUTELADO.**

Tratándose del delito de despojo, el bien jurídico tutelado no es el derecho de propiedad, sino la posesión quieta y pacífica del inmueble. Así, para la existencia de esa infracción es irrelevante que el ofendido sea o no propietario del respectivo bien.

DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. Una vez se ha establecido la materialidad de la conducta tipificada como Despojo en el numeral 262 fracción I del Código Penal para el Estado de Jalisco cometido en agravio de ***** y **** **** de apellidos *****, resta analizar si de dicho delito es responsable ***** ****, para lo cual, en atención a los arábigos 14 Constitucional y 293 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, deberá de estudiarse si es ella quien (como se acusó) desplegó aquella conducta actuando por sí misma, que además, su conducta es antijurídica y que de la misma resulta dolosamente culpable.

De la conducta. De acuerdo con el órgano acusador que formuló aquel juicio de responsabilidad en términos del arábigo 21 Constitucional, ***** * es la persona que entre las 18:00 dieciocho horas del día 17 diecisiete de agosto de 2012 dos mil doce y el día 20 veinte del mismo mes y año, actuando de propia autoridad, furtivamente y con violencia en las cosas (desplegada sobre las chapas de la puerta), ocupó la finca marcada con el número ***** **** en la localidad de ***** en el municipio de *****, usurpando la posesión que no le asistía a ella sino a ***** **** y a *****. Para analizar si en autos se encuentra demostrada aquella forma de intervención de la ahora acusada, debe analizarse en lo individual cada uno de los medios de prueba aportados para tal efecto, empero sin que se considere necesario transcribir nuevamente su contenido, en acatamiento al principio de legalidad, como así se indica en la tesis jurisprudencial J/9 emanada del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito que obra en la página 2260 del tomo XX de la novena época del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta publicada en octubre de 2004, con el rubro: **RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE**

DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Cuyo texto versa:

La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutive del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de legalidad.

Las denuncias presentadas por las pasivas *****
***** y *****.

Denuncias que conforme al numeral 266 del Enjuiciamiento

Penal Estatal adquieren valor probatorio de indicio en torno a que ***** y *****, desde el año 2008 dos mil ocho cuidaban de una persona de nombre ***** en la finca marcada con el número ***** ***** en la localidad de ***** ** en el municipio de *****, finca en la que al fallecimiento de ***** acaecido el día 02 dos de noviembre del año 2011 dos mil once, ambas pasivas quedaron en su posesión, continua y pacífica hasta el día 17 diecisiete de Agosto del año 2012 dos mil doce, salieron de dicha finca, hacia ***** *****, del municipio de ***** *** Jalisco; dejando la casa debidamente cerrada, pero a su regreso, el día lunes 20 veinte de Agosto del mismo año, al tratar de abrir la puerta, no pudieron hacerlo ya que la chapa estaba cambiada y ***** tenía ocupado aquel inmueble. Manifestaciones que se consideran indicio de la comisión del delito que nos ocupa, y que de ninguna manera pueden negárseles valor probatorio, pues ese tratamiento no es dable atento al numeral 266 antes invocado que prevé expresamente que al dicho del ofendido se le concederá valor probatorio de indicio, además de que a través de la tesis jurisprudencial J/8 (de observancia obligatoria conforme al numeral 217 de la Ley de amparo) sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 51 del número 70 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación publicado en la novena época en octubre de 1993, que a la voz dice: **OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL.** Se impone la obligación a la autoridad judicial de otorgar ese valor de indicio al dicho del agraviado; véase:

Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el examen de la víctima, de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en la ausencia de testigos, se dificultaría sobre manera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concedía crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario por si sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante.

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que este tribunal tiene la obligación de otorgar al dicho del ofendida el valor de indicio a que alude la legislación adjetiva en la materia y que lo que quedará al análisis de su corroboración en base al resto de los medios de prueba, será si dicha denuncia se considerará como un indicio preponderante o en su caso aislado. Por lo que sobra decir que el argumento de la defensa, además de lo anterior, también es infundado cuando señala que la ofendida es omisa en justificar la posesión que detenta respecto de la finca que es materia de controversia detentaba, pues contrario a ello, se encuentra aseverando, se insiste que a nivel de indicio, que desde el año dos mil ocho habitaban esa finca.

La inspección ministerial de la finca controvertida, misma que adquiere valor probatorio pleno de acuerdo a lo estipulado en el artículo 269 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, apto para demostrar la existencia del bien que es sujeto a controversia, el que por sus características se trata de aquellos considerados legalmente como inmuebles y que además, se fe dató que el mismo se encontraba ocupado por *****.

Lo declarado por la testigo ***** *****, testimonio al que no puede concedérsele más valor que el otorgado en primera instancia como un indicio al tenor el numeral 265 del Código Procesal Penal para el Estado de Jalisco del que se desprende que a la declarante le consta que ***** y ***** ***** habitaban en la finca marcada con el número ***** ***** en la localidad de ***** en el municipio de *****, ***** lo que así hicieron por un periodo aproximado de diez años; que sabe que las ofendidas acostumbraban salir de su caso por lapsos de uno o dos días y; que el día 21 veintiuno de agosto del año 2012 dos mil doce vio que se quemaba algo dentro de aquella finca y después supo que a las pasivas ya no les fue permitida la entrada a la finca. Entiéndase pues, el anterior testimonio es un indicio de que ***** y ***** vivían antes del día de los hechos en aquella finca controvertida y luego les fue impedido el uso de tal vivienda por ***** *****.

Se cuenta con lo declarado por el testigo ***** *****, que al ser valorado de manera individual no

tiene sino el valor de indicio a que se refiere el arábigo 265 del Código Procesal Penal para el Estado de Jalisco, brindando como datos relevantes el que el testigo señala que le consta que al morir ***** las pasivas ***** y ***** quedaron viviendo en la finca marcada con el número ***** en la localidad de *****; que en una ocasión ambas pasivas salieron de la casa y no regresaron en dos días, lapso en el que el testigo advirtió cuando un cerrajero alrededor de las 17:00 diecisiete y las 18:00 dieciocho horas cambiaba las chapas de la puerta de acceso a la finca, para al día siguiente advertir la presencia de la ahora acusado en el interior de la finca mientras quemaba cosas. Es decir, el testimonio en cuestión es un indicio que apunta a que ***** y ***** habitaban aquella finca ***** de *****, ***** y que advirtió a ***** como quien había ocupado aquella finca.

Obra en actuaciones lo declarado por el testigo de los hechos de nombre *****. Testimonio singular con valor probatorio indiciario al tenor del artículo 265 de la Ley Adjetiva en Materia Penal para el Estado de Jalisco, del que se desprende que al declarante le consta que ***** y ***** vivían en la finca ***** de la localidad *****. Que el día 17 diecisiete de agosto del año 2012 dos mil doce las pasivas salieron de su domicilio y lo dejaron cerrado regresando hasta a los dos o tres días y el día 20 veinte de agosto del mismo año vio a la ahora acusada en el interior de la finca donde vivían las pasivas e incluso se pudo percatar de que ya ambas no pudieron volver a ingresar a su domicilio. En ese sentido, el testimonio que nos ocupa es un indicio de que ambas pasivas vivían y tenían en su posesión el bien inmueble que nos ocupa y que posteriormente al día 17 diecisiete de agosto del año 2012 dos mil doce ya no pudieron volver a usar el mismo porque ***** ***** había ingresado al mismo.

La declaración emitida por la testigo de cargo ***** *****. Declaración que al analizarse de manera singular, tiene valor probatorio de indicio conforme al artículo 265 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, que para lo que en el asunto concreto nos interesa

revela que ambas pasivas ***** y ***** ***** sí tenían la posesión de la finca marcada con el número ***** ***** de la localidad ***** en el municipio de *****, pues dice constarle que ambas vivían ahí y que en su posesión fueron usurpadas por *****.

No pasa desapercibido a los que esto resuelven, que como testimonios de cargo, durante la etapa de instrucción se desahogaron los dichos de ***** (visible a foja 142 del original) y ***** (que obra a foja 145 de los autos sometidos a revisión), empero sin que se estime procedente valorarlos como útiles para pretensión punitiva dado que al no ser motivo de queja su desestimación por parte de la representación social, esta Sala no puede utilizarlos como una prueba más en contra de la acusada pues de hacerlo así sería tanto como resolver en perjuicio del recurrente, lo que desde luego se proscribe en el numeral 328 del Código Procesal Penal para el Estado de Jalisco.

Los medios de prueba antes enunciados valorados en lo individual conforme a los arábigos 264, 265, 266 y 269 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, ahora adminiculados de manera lógica, jurídica y natural, permiten aseverar que, como se dijo en primera instancia, que ***** es la persona que actuando por sí misma, desplegó la conducta tipificada como **DESPOJO** en la fracción I del artículo 262 del Código Penal para el Estado de Jalisco cometido en perjuicio de ***** y ***** de apellidos *****.

Lo que acontece en razón a que al concatenar el dicho de las pasivas, corroborado por los testigos antes analizados en lo individual y con la inspección ministerial de la finca ocupada, revelan que previo a las 18:00 dieciocho horas del día 17 diecisiete de agosto del año 2012 dos mil doce, ***** y ***** de apellidos *****, tenían la posesión de la finca marcada con el número ***** ***** en la localidad de ***** municipio de *****, finca de la que tenían una posesión quieta y pacífica, desde que comenzaron a vivir en aquel lugar con *****. Que mientras ***** y ***** se encontraba ausentes de aquella finca en el transcurso de aquel día 17 diecisiete al 20 veinte de

agosto del año 2012 dos mil doce, *****
***** mandó cambiar la chapa de la puerta de acceso a la finca, por lo que a partir de aquel momento, las pasivas ya no pudieron hacer uso de aquel inmueble, en virtud de que además de impedirle el acceso, *****
***** la había ocupado, de propia autoridad y sin orden judicial alguna.

Sin que para arribar a la anterior conclusión, sea obstáculo lo alegado en esta instancia por la sentenciada *****
*****. Declaración que si bien no constituye confesión alguna ya que lejos de que la acusada reconozca los hechos delictivos que le son atribuidos, niega categóricamente haber desplegado tales actos criminales, aduciendo que en contra de lo denunciado por ***** y *****, la ahora sentenciada *****
***** es quien siempre ha ostentado la posesión del inmueble número *****
***** en la localidad de *****
***** en el municipio de ***** y que quienes viven en esa finca son su hija ***** y su marido a quienes ellas les prestó la casa para vivir en ella. Sin embargo, conforme al numeral 276 del Código Procesal Penal para el Estado de Jalisco, al apreciar el contenido de aquella declaración en significación con el resto del caudal probatorio que obra en actuaciones, es evidente que esa sola negativa es insuficiente para desvirtuar el cúmulo que han permitido arribar a la conclusión a la que se ha llegado. Esto es, mientras la inculpada niega haber cometido el delito que se le imputa e insiste en que ella ya tenía previamente la posesión del inmueble *****
***** de la localidad de *****, en contra de dicha afirmación se cuenta con lo denunciado por las pasivas ***** y *****
*****, con el dicho de los testigos *****
*****, ***** y *****, ***** y *****, ***** y *****, testigos todos los cuales coinciden en señalar que ambas pasivas –y no la acusada– eran quienes tenían la posesión de la finca controvertida, lo que además se vio apoyado en un aviso de recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad en donde consta que una de las pasivas es la titular del servicio de suministro de electricidad que se provee a aquella finca, así como con las constancias del catastro del municipio de *****, ***** en donde se hace constar que como propietarias del bien en cita se encuentra registradas ambas denunciadas. De lo

anterior, es consecuencia que la sola negativa de la inculpada sobre los hechos que son materia de acusación, sea insuficiente para desvirtuar el cumulo de pruebas que sopesan su contra, ello aún y cuando para tratar de apuntalar su negativa sobre los actos atribuidos, haya presentado como testigos a los declarantes ***** ***** y *****, testimonios a los que si bien el juez de primer grado dijo les otorgaba valor probatorio de indicio al tenor del 265 del Código Procesal Penal para el Estado de Jalisco con tendencia a demostrar que tanto ***** ***** como ***** ***** son quienes han habitado en la finca marcada con el número ***** ***** en ***** de *****, desde que ambos contrajeron matrimonio y por así haberles sido autorizado por la inculpada ***** *****. Sin embargo, al analizar estos testimonios en confrontación con el resto de los que obran en autos, conforme lo indica el artículo 276 de la Ley Adjetiva en Materia Penal para el Estado de Jalisco, debe decirse que sobre estos testimonios debe prevalecer las pruebas que de manera conjunta y contundente indican que no era los declarantes quienes vivían y poseían la finca controvertida, sino que dicho derecho lo ostentaban las ahora agraviadas, quienes así lo declararon y lo que se vio aseverado con sendos testigos ya previamente analizados y con documentos allegados para tal efecto.

Ello es así a pesar de que para corroborar el argumento defensivo de la inculpada *****, también se allegaron los testimonios de ***** ***** (visible a foja 88 de los autos originales), ***** (a foja 89 del original), ***** (visible en la foja 171 del los autos sometidos a revisión), ***** (que corre agregada en la foja 172 del expediente que se analiza), ***** (consultable a foja 173 de los autos originales) y ***** (que obra en la foja 87 y en la 174 del original); lo anterior acontece en razón a que la testigo ***** al declarar, asevera que la acusada ***** siempre ha vivido en la finca controvertida y que las pasivas no viven en ese lugar, sin embargo, ni siquiera la propia ***** alega vivir en aquella vivienda sino que alega que es su hija quien habita la misma, además, asevera

que las pasivas no viven ahí pero también asegura no conocerlas. Por su parte, la testigo *****, asevera que la acusada siempre ha vivido en el domicilio materia de controversia pero nuevamente debe decirse que la misma acusada al verter sus argumentos defensivos jamás aseveró que ella vivía ahí, sino que dijo que su hija era la habitante de aquella finca. Luego, la testigo ***** cuando declara lo hace de una forma poco clara y sin que de su dicha se concrete nada que sirva para apoyar a la inculpada –o en su caso perjudicarla- pues sólo se limita a decir que la familia de ***** (inculpada) siempre ha vivido ahí en ***** y que nunca supo de problemas. Por otro lado, la testigo de descargo ***** simplemente se concreta a señalar que ***** es quien siempre ha vivido en “esa casa” no pudiendo siquiera señalar a qué vivienda se refiere, además de que se insiste, la propia inculpada al defenderse no dijo ser ella quien habita aquella finca sino que lo hace su hija. Por lo que toca al ateste *****, este al declarar no refiere nada en relación a los hechos que se controvierten y luego, al ser interrogado, dice que posterior a que ***** murió hasta las fechas en que declara (veintiocho de noviembre de dos mil trece) que vive ***** en ese lugar, es decir, que ni siquiera puede aseverar que ***** o alguien más viviera en el domicilio controvertido, constriñéndose a aseverar tajantemente que las pasivas no vivían ahí. Finalmente el testigo ***** en las dos ocasiones en que declaró trató de enfatizar en que la ahora acusada es la dueña de la finca controvertida (lo que no es materia del la litis que nos distrae), para luego aseverar que ***** tiene muchos años “ahí” pero sin poder precisar en qué domicilio y por último refiere que las pasivas nunca han vivido en ese lugar para luego concluir diciendo que en realidad ni siquiera las conoce. Así, es evidente que todos estos testigos ofertados como de descargo, carecen de valor probatorio alguno, pues conforme al numeral 264 fracción IV del Enjuiciamiento Penal Estatal al carecer de precisión y claridad –por las razones que por cada una de ellas ya se asentaron- debe considerarse sin fuerza convictiva y por ende, inútiles para reforzar los argumentos defensivos de la acusada.

Tampoco destruye lo hasta el momento demostrado el resto de las pruebas ofrecidas por la defensa pues la existencia de una inspección judicial desahogada a foja 149 de los autos originales no demuestra el argumento defensivo de la pasiva

al no contener dato alguno que lo apoye, caso que se repite al acudir al recibo de gastos funerarios que obra a foja 132, mismo que no contiene dato alguno que apoye el argumento defensivo de la agraviada. En ese mismo sentido deben señalarse las copias simples de una cartilla militar (foja 156), contrato de compra venta (157) y dos constancias médicas (159 y 162), pues además de ser copias simples carentes de valor probatorio, son sobre actos que carecen de trascendencia en torno a los hechos que nos ocupan.

Por ello este Tribunal considera legal que se haya considerado a ***** como quien, *actuando por sí misma* en términos del artículo 11 fracción II del Código Penal Estatal, con dominio pleno del hecho, de propia autoridad, de manera furtiva y empleando violencia en las cosas, entre las 18:00 dieciocho horas del día 17 diecisiete de agosto del año dos mil doce y el día 20 veinte del mismo mes y año ocupó la finca marcada con el número ***** en la localidad de ***** en el municipio de *****, de la cual ***** y ***** de apellidos *****, mantenían, hasta aquel momento, una posesión quieta y pacífica. Es decir, ella es quien desplegó la conducta típica del ilícito de Despojo previsto en el artículo 262 fracción I del Código Punitivo Estatal, cometido en agravio de ***** y ***** de apellidos *****, actuando por sí misma, pues nadie más que la ahora sentenciada era quien tenía el dominio pleno del hecho criminoso materia de la acusación, de ahí que conforme fue formulada la acusación ministerial, debe considerarse como autor material directo.

De la antijuridicidad. En ese sentido, para determinar si *****, es penalmente responsable en la comisión de aquel delito debe de apuntarse que las actuaciones allegadas permiten demostrar, más allá de cualquier hesitación que la inculpada ***** al ocupar, de propia autoridad y empleando la furtividad y violencia, un inmueble que diversa persona poseía de manera quieta y pacífica, actuó desvalorando la norma prohibitiva consagrada en el artículo 262 del Código Penal para el Estado de Jalisco, que expresamente proscribió aquel acto tutelando la posesión que sobre bienes inmuebles ejercen los ciudadanos con independencia de que aquellos derechos se encuentren o no en disputa, ignorando así la protección que sobre el patrimonio de toda persona consagra la ley y transgrediendo el patrimonio de las personas que

protege la ley penal, además de la prohibición de auto tutela que se contiene en el numeral 17 Constitucional. Para demostrar lo anterior, es más ilustrador analizar este punto desde los aspectos negativos de la antijuridicidad, es decir, al advertir que la hoy sentenciada no obró bajo ninguna causa de justificación de las contenidas en la legislación penal, así, es claro que no actuaba en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de derecho alguno; tampoco que al ocupar de propia autoridad un inmueble que poseía diversa persona obedeciera a un estado de necesidad justificante al no encontrarse bajo el supuesto en que debiera actuar como lo hizo por la urgencia de salvar diverso bien jurídico propio o bajo su tutela ante un peligro real, grave e inminente; que evidentemente no se encontraba impedida de manera alguna para apegar a la ley; menos aún que hubiera actuado en legítima defensa de su persona, honor, derechos o bienes o de los que se encontraran bajo su tutela rechazando una agresión actual, real, violenta e ilegítima que le generara un peligro inminente. De lo anterior se deduce plenamente comprobado que la conducta desplegada por la sentenciada es evidentemente **antijurídica**.

De la culpabilidad. Finalmente es preciso puntualizar que se considera como presupuesto de la culpabilidad la imputabilidad de la ahora acusada de nombre *****
*****, para así alcanzar a establecer si su proceder fue voluntario y consciente para estar en condiciones de reprocharle penalmente su conducta. De donde se advierte al analizar los autos que la misma es imputable al tratarse persona mayor de dieciocho años, que no sufre de demencia u otro trastorno mental permanente, ni advertirse que al ejecutar el acto se encontrara bajo la influencia de un transitorio y grave de personalidad producido de manera accidental e involuntaria; que fuera sordomudo, ciego de nacimiento o sobrevenida antes de los cinco años y que careciera de instrucción total; o que hubiere actuado bajo un estado de miedo grave, cuando cualquiera de estas circunstancias hubieran anulado su capacidad de discernimiento; así también, es claro que a la ahora acusada le era lógico, racional y legalmente exigible conducirse conforme a la norma jurídica (que le prohíbe ocupar de propia autoridad y furtivamente inmuebles que posee otra persona) pues tampoco se advierte que hubiera actuado por temor fundado e irresistible; que el hecho ejecutado fuera delictivo solo por circunstancias particulares del ofendido; que el resultado se hubiera causado por mero accidente; bajo un supuesto de error de hecho, esencial e invencible; ni

Al efecto, es aplicable la Jurisprudencia 247 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 183, tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: **PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS.**

El incumplimiento de las reglas para la individualización de la pena no causa agravio que amerite la protección constitucional, si el sentenciador impone el mínimo de la sanción que la ley señala para el delito cometido.

Por ello se considera apegado a derecho la sanción impuesta a ***** por **02 DOS MESES DE PRISIÓN** pues además de ser la pena mínima aplicable al caso concreta, esta le fue disminuida en un tercio en razón a que la acusada tiene más de sesenta y cinco años de edad; pena que como dijo el Juez se entiende con derecho al beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL reunidos que sean los requisitos que contempla el numeral 67 del Código Penal para el Estado de Jalisco o con derecho a la su conmutación en términos del numeral 62 del Código Penal Estatal; pena de prisión que deberá ser compurgada en el Centro Femenil de Reinserción Social del Estado o en el lugar que para tal efecto designe la autoridad correspondiente en donde se le deberá someter a un régimen de rehabilitación social e intelectual necesario para su reinserción en sociedad; pena a la cual habrá de comenzar a correr a partir del día que la sentenciada ingrese al centro penitenciario respectivo. Igualmente, por ser la pena pecuniaria mínima aplicable al caso concreto, se sostiene la condena al pago de una **MULTA** por la cantidad de \$118.16 ciento dieciocho pesos 16/100 moneda nacional equivalente a 2 dos días de salario mínimo vigente en la época de los hechos a razón de \$59.08 pesos tal y como se hizo constar a foja 14 de los autos originales; sanción que deberá cubrir a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.

DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Ahora bien, este cuerpo colegiado, considera que ningún perjuicio ocasiona a la sentenciada lo resuelto en este sentido por el Juez de primera instancia, ya que la condena impuesta encuentra su fundamento en la fracción IV del apartado B del arábigo 20 Constitucional (previo a la reforma de 2008 y vigente conforme al segundo artículo transitorio de aquella misma reforma), es decir, que una vez que se le ha encontrado penalmente responsable de la conducta típica de Despojo en detrimento del patrimonio de ***** y *****

*****, conforme al numeral 94 del Código Penal Estatal adquiere la obligación constitucional de reparar a éste el daño causado. En ese sentido, de acuerdo con el diverso 96 fracción II ídem, en el caso concreto, la reparación del daño comprenderá la restitución de la cosa obtenida por el delito, por lo que en el caso que nos ocupa si se le ha encontrado responsable de que ***** ***, actuando por sí misma, de manera furtiva y de propia autoridad, ocupó la finca marcada con el número ***** ***** en la localidad ***** del municipio de ***** *****, es legal que la condena impuesta a esta sea la restitución definitiva de aquella finca a favor de las ofendidas.

DE LA AMONESTACIÓN. Que ningún perjuicio causa a la sentenciada lo ordenado por el *A Quo* en cuanto este punto, pues tiene apoyo en lo que disponen los artículos 30 de la Ley Sustantiva Penal y 295 del Código Procesal Penal, de donde se considera procedente amonestar a la acusada en audiencia pública, a fin de prevenir su reincidencia, explicándosele las consecuencias del delito cometido, exhortándole a la enmienda y previniéndole de las sanciones que se le impondrán en caso de incurrir nuevamente en la comisión de diverso ilícito doloso.

Por todo lo antes razonado, este cuerpo colegiado no puede sino declarar INFUNDADOS los agravios expresados por la defensa, al no advertir agravio que suplir a favor del sentenciado, ello trae como consecuencia necesaria que se deba **CONFIRMAR**, la sentencia definitiva de fecha 11 once de Abril del año 2014 dos mil catorce, pronunciada por el C. Juez Mixto de Primera Instancia con sede en ***** *****, dentro de la causa penal expediente número **100/2012**, instruido en contra de ***** *****, por el delito de **Despojo**, cometido en agravio de ***** ***** *****.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 316, 317, 318, 319, 320 y demás aplicables del Enjuiciamiento Penal para el Estado de Jalisco;

SE RESUELVE:

PRIMERA. Se **CONFIRMA** la sentencia definitiva pronunciada el día 11 once de Abril del año 2014 dos mil catorce, pronunciada por el C. Juez Mixto de Primera

Instancia con sede en *****, dentro de la causa penal expediente número **100/2012**, instruido en contra de *****, por el delito de **Despojo**, cometido en agravio de ***** **y** *****.

SEGUNDA. Con testimonio de lo anterior, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvieron los C. C. Magistrados Licenciados TOMÁS AGUILAR ROBLES, RAMÓN SOLTERO GUZMÁN (ponente) y JOSÉ FÉLIX PADILLA LOZANO, quienes integran la H. Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco. Actúa en la Secretaría de Acuerdos la Licenciada SANDRA FABIOLA MORA ROBLES, quien autoriza y da fe.

*****/*****.